

CRISIS POLÍTICA Y BIPARTIDISMO EN COSTA RICA

Apuntes sobre Hechos Recientes

*Álvaro Vega
Sánchez*
Sociólogo
avega@una.ac.cr

RESUMEN

El presente artículo ofrece algunos apuntes sobre el impacto que está teniendo la crisis política actual en los partidos políticos mayoritarios en Costa Rica, a saber, el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Este bipartidismo es concebido hoy, por buena parte de la ciudadanía, como un único poder bicéfalo: PLUSC.

Se plantea que estamos asistiendo a una reconfiguración del escenario político-partidista de cara a una nueva ciudadanía política costarricense más crítica y decidida a demandar del liderazgo político, coherencia, voluntad y transparencia, para enfrentar los grandes retos de una sociedad cada vez más polarizada social y económicamente.

En concreto se recoge, en apretada síntesis, el itinerario seguido por el bipartidismo desde su conformación hasta sus transformaciones recientes, que constituyen una expresión fundamental de la crisis política en la coyuntura actual.

No se pretende mostrar un diagnóstico riguroso de la crisis política, sino más bien ofrecer una valoración de algunos hechos significativos que ponen en evidencia dicha crisis y su relación con el bipartidismo.

SUMMARY

The following article offers some notes on the impact that the recent political crisis is having on majority Costa Rican political parties, notably the PLN (Partido Liberación Nacional) and PUSC (Partido Unidad Social Cristiana) parties. This bipartisanship is viewed today by a large percentage of citizens as a single two-headed power: the "PLUSC".

It has therefore become evident that we are on the brink of a reconfiguration of the political scenario, due to a new breed of Costa Rican citizens who are more critical and determined to demand from the political leadership coherency, goodwill and clearness, in order to face the big challenges of a more and more socially and economically divided society.

Overall, this article summarizes the itinerary followed by bipartisanship, from its initial stages to its recent transformations, which constitute the fundamental expression of the political crisis on the current juncture.

The intention is not to rigorously diagnose the existing political crisis, but rather to offer an evaluation of some significant events that evidence said crisis and its association to bipartisanship.

INTRODUCCIÓN

En el año 2004 se produjo, en Costa Rica, el más fuerte sismo político de su historia reciente. Es paradigmático el hecho de que, en ese mismo año, fuesen sometidos a procesos judiciales —incluida la encarcelación preventiva— dos ex-presidentes, Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez (ambos del Partido Unidad Social Cristiana, PUSC)¹; un sacerdote católico: Minor de Jesús Jiménez, y un empresario: el señor Omar Chaves². Asimismo, el ex-presidente

te José María Figueres Olsen, del Partido Liberación Nacional (PLN), está siendo investigado —actualmente— por presuntos beneficios económicos obtenidos por la venta de servicios —asesorías— a la empresa francesa ALCATEL.

Podría decirse que estos personajes simbolizan los tres pilares fundamentales sobre los que se ha asentado el poder político hegemónico costarricense, en las últimas cuatro décadas: los partidos neooligárquicos, la Iglesia Católica y el sector empresarial transnacionalizado³. Si bien es cierto que en la década de los años 40 se dio una fractura en el pacto oligárquico que mantenía el poder político en manos de un puñado de ricos cafetaleros, ligados al negocio de la comercialización del café, el desarrollo político posterior, en lo fundamental, mantuvo patrones de concentración de poder y privilegio. El bipartidismo constituido por las fuerzas emergentes, que recogió la

1. Los dos ex-presidentes han sido procesados por recibir dineros por parte de empresas que licitaron ofertas con el Estado. En un caso se trató de un préstamo del gobierno de Finlandia, para adquirir equipo médico, con mediación de la empresa farmacéutica nacional Fishel. En el otro, de la empresa francesa de telecomunicaciones ALCATEL que ofreció dineros para ser favorecida con la respectiva licitación.

2. Tanto el padre Minor como el empresario Chaves están siendo procesados, judicialmente, como posibles autores intelectuales del asesinato del periodista Parmenio Medina, crítico incisivo de hechos de la vida política y social costarricense, a través del que fuera el popular programa humorístico "La patada". Su muerte en manos de pistoleros contratados, se produjo en el marco de las denuncias y críticas hechas al negocio de Radio María y al mismo padre Minor.

3. Cabe destacar que sería una omisión no incluir directamente a la prensa escrita radial y televisada como un actor político de importancia, incluso en algunas coyunturas más influyente y decisivo que los mencionados. Sin embargo, aquí partimos de que la prensa costarricense, en lo fundamental, ha sido una aliada incondicional de los sectores empresariales y los gobiernos de turno (bipartidismo), con una escasa autonomía; se ha convertido en reproductora del bipartidismo así como del discurso del sector empresarial. Sin embargo, el papel que ha asumido ante los hechos recientes pareciera obedecer a una estrategia de toma de distancia de sus aliados históricos; sin que se perciba, ni mucho menos, un interés por abrir el espacio para un cambio significativo en el modelo político prevaliente. Para la prensa el *statu quo* económico y político no está en cuestión; su ideario pareciera orientarse hacia un neoconservadurismo, que busca simplemente moralizar la gestión pública y privada para mantener el actual sistema de desigualdad y concentrador de la riqueza.

herencia ideológico-política del calderonismo y del figuerismo, respectivamente, contribuyó a darle un nuevo rostro a aquel pacto oligárquico fundacional. Es así como la sociedad costarricense actual mantiene un perfil neo-oligárquico, con una acentuada polarización económica que se expresa en una especie de medievalismo social.



El bipartidismo tradicional (cuya expresión actual está representada por el PUSC y el PLN) en sus orígenes se convirtió, con una relativa consistencia ideológica y programática, en un catalizador de las expectativas de ascenso social de los sectores medios y bajos de la población costarricense; pero, ante todo, en un oxigenador de los grandes negocios que, como se ha señalado con acierto, condujo a un modelo *sui generis* de “políticos empresarios” y “empresarios políticos”. El bipartidismo se entronizó una vez recuperado el ideario de las luchas sociales del “proletariado” bananero de afiliación comunista de los años 30, por parte de la Doctrina Social de la Iglesia, que, a su vez, tuvo como expresión política al social cristianismo en sus diversas versiones. A ello contribuyó también la deslegitimación del Partido Comunista —más ideológica que jurídica— que realizaran las fuerzas políticas emergentes bajo la dirección del caudillo José Figueres Ferrer. El bipartidismo en su desarrollo posterior, en lo fundamen-

tal, y especialmente en las últimas décadas sometido a la ortodoxia neoliberal, acentuó su perfil oligárquico de nuevo rostro.

Por su parte, el papel social asumido por la Iglesia Católica —otro de los actores políticos importantes— que contribuyó, en forma relevante, con los esfuerzos de reforma social de los años 40 —en las últimas décadas— no

ha sido muy diferente al del bipartidismo. Ha procurado mantenerse, como una tercera fuerza política, en una frágil posición centrista, entre los intereses neoligárquicos y los populares, no alcanzando a proyectarse más allá de un tímido reformismo social. Su interés fundamental en mantener la hegemonía religiosa y cultural en el país, la ha hecho sumamente vulnerable al coqueteo de los gobiernos de turno del bipartidismo. El trueque de legitimidad religiosa-cultural por legitimidad política-civil ha significado una devaluación de su papel como acompañante solidaria de los más pobres y excluidos.

El actor político de mayor relevancia lo constituye, sin duda, el sector empresarial, representado por la UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada). De alguna manera se ha convertido en el interlocutor privilegiado de los gobiernos de turno, cuando se trata de tomar decisiones de alto nivel en ámbitos del quehacer

económico, social y político. Este actor está constituido fundamentalmente por las fracciones vinculadas al mercado externo y al mercado financiero; de ahí que pueda tipificarse de transnacionalizado. Ambas fracciones han resultado beneficiadas con la política de promoción e impulso a las exportaciones, así como de privatizaciones y apertura comercial, incluso contando con el apoyo gubernamental vía estímulos financieros, tales como los Certificados de Abono Tributario (CAT) y otras exoneraciones.

Si bien es cierto que en las últimas décadas hemos visto emerger con alguna fuerza a un sector de medianos y pequeños empresarios (las denominadas PYME), los expertos acusan la falta de apoyo a este sector y sus escasos vínculos o encadenamientos productivos con las grandes empresas nacionales y, principalmente, transnacionales. Se continúa reproduciendo un modelo de economía de dos caras, una de las cuales -como la de la luna- se trata de ocultar para vender la idea de que marchamos por el camino acertado hacia el desarrollo. Lo cierto es que, detrás de este discurso, se legitima un modelo empresarial concentrador de riqueza y cimentado en los grandes consorcios transnacionales, como agentes de desarrollo; prevalece así el espíritu del poder oligárquico, ahora con un nuevo rostro empresarial modernizante.

Tanto el poder religioso como el político han tenido como aliados a los sectores empresariales naciona-

les y extranjeros. El poder político facilita el acceso a los grandes negocios, especialmente cuando estos tratan de lograr concesiones y beneficios especiales para asentarse en suelo costarricense u obtener tratos preferenciales a la hora de licitar con el Estado. Por su parte, el poder religioso contribuye a legitimar al político y al económico manteniendo en bajo perfil la denuncia de las injusticias sociales que padece el país, así como la acción solidaria con los sectores socialmente más desprotegidos.

Este maridaje tripartito, algunas veces semioculto o clandestino, ha sido puesto en evidencia por un acucioso trabajo que ha venido realizando, principalmente, la nueva jefatura del Ministerio Público en la persona del Fiscal General Francisco Dall' Anese. También los medios de comunicación, especialmente la prensa y la televisión, han contribuido a develar este tejido de tres agujas. Los hechos del 2004, tal y como han sido expuestos a la luz pública, mostraron la otra cara de la democracia costarricense, o, más bien, lo caricaturesco e ideológico que resultaba la imagen de una sociedad civilista y democrática ajena al virus de la corrupción: enfermedad endémica de nuestro tiempo.

Puestos en evidencia los compadrazgos políticos que servían de plataforma para facilitar los grandes negocios transnacionales, la ciudadanía costarricense, que había venido dando signos de un despertar crítico y propositivo —especialmente al calor de la denominada lucha

contra “el combo del ICE”, en la administración del Dr. Miguel A. Rodríguez–, se apresta hoy a ofrecer una respuesta más organizada y articulada ideológica y políticamente a esos tres pilares del poder político hegemónico costarricense. Todo ello confirma que estamos viviendo una coyuntura de crisis política de alta densidad, que puede conducir a la reconfiguración del modelo de democracia costarricense con un nuevo protagonismo de los sectores sociales medios y bajos. Pero, a diferencia de los años 40 y siguientes, en donde estos sectores cumplieron un papel más reivindicativo desde el punto de vista económico y social, en el contexto actual se aprestan a asumir un papel más relevante de carácter propiamente político. Es decir, no se trata solamente de la búsqueda de vías de ascenso social, mediante la preservación y el afianzamiento de la institucionalidad social tradicional de servicios públicos y el ensanchamiento del aparato burocrático del Estado, sino, ante todo, de tomar las riendas del poder para abrir espacios de participación –más directa y efectiva– a la ciudadanía en general, particularmente a aquellos sectores que han venido siendo marginados de la palestra política. Tal parece ser la motivación de un nuevo movimiento social que reclama ir más allá del modelo de democracia representativa.

— Cuando hablamos de crisis política, hacemos referencia, siguiendo a Gramsci, a la pérdida de legitimidad de los sectores y fuerzas del “bloque histórico” en el poder. Este

bloque, constituido por las tres fuerzas políticas anteriormente mencionadas, ha entrado en una etapa de pérdida creciente de legitimidad, en el triple sentido en que la entendió Max Weber, a saber, la legitimidad legal, tradicional y carismática.

Efectivamente, estas fuerzas han venido actuando al margen de la ley, cuando se trata ya sea de promover y proteger sus finanzas –en especial evadiendo al fisco o en la utilización de recursos y medios ilegítimos para acceder al poder particularmente en el caso del financiamiento de los partidos políticos–. Se acusa también una suerte de cabildeo que ha permitido, en alguna medida, incidir en instancias de más alto rango jurídico, como lo es la Sala IV o Constitucional. Tal fue el polémico caso, aún con visos de inconstitucionalidad, de la aprobación por parte de dicha Sala de la reelección presidencial, para facilitar las aspiraciones presidenciales del Dr. Óscar Arias Sánchez, otrora connotado líder del Partido Liberación Nacional y actual Presidente.

Desde la perspectiva de la legitimidad tradicional, se desdibujan las huellas de los logros que, en materia social y económica, se dieron en las décadas de los años 40 y 50. En el caso del bipartidismo los herederos políticos de las dos fuerzas hegemónicas tradicionales –los ex presidentes Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres Olsen–, no alcanzaron a proyectar sobre nuevas bases los viejos logros de sus progenitores. De esta manera, ha venido a menos ese

legado tradicional que actuaba con fuerza, perfilando una modalidad de cultura del desarrollo con equidad y justicia social. Por su parte, los nuevos empresarios, con algunas excepciones, no han mostrado la sensibilidad social suficiente para recoger ese legado. Respecto de la Iglesia Católica, actor que se precia de contar con el mejor saldo a favor en cuanto a este tipo de legitimidad, no olvidemos que la religión adquiere su fuerza y autoridad en gran medida de la tradición, por eso se esmera por preservarla y reproducirla. Lo cierto es que cada vez más se cuestiona su función cuando apela únicamente a la autoridad tradicional, toda vez que esta no es actualizada.

Y en lo que toca a la legitimidad carismática, ya es lugar común la insistente referencia a las debilidades del liderazgo actual. No se cuenta con liderazgo político, religioso ni empresarial que tenga la fuerza y capacidad de provocar adhesiones fuertes, ni de inspirar confianza para ganarse la credibilidad de la gente. Quienes en alguna medida han hecho alarde de cualidades carismáticas, muestran más bien un perfil populista débil o "light". El carisma de algunos líderes políticos se ha visto empañado por la falta de articulación de un discurso que vaya más allá del moralismo tradicional, cuando se apela a la búsqueda de la superación de la corrupción, y de las ofertas triunfalistas que cada vez más son percibidas como cinismo y demagogia. Y es que, efectivamente, si hay crisis de liderazgo es porque, en lo

fundamental, se trata más bien de una crisis de visión y de proyecto. Aunque siga pesando el carisma del líder, se puede apreciar que la ciudadanía está reclamando claridad y calidad en el planteamiento de una propuesta alternativa.

En el presente artículo intentamos ofrecer algunos apuntes sobre la crisis política actual, vista desde el impacto que dicha crisis está teniendo en el bipartidismo de cara a una nueva ciudadanía política en construcción. De hecho resulta restrictivo hablar sólo del bipartidismo, cuando hemos hecho referencia a un bloque constituido, además del bipartidismo neo-oligárquico, por la Iglesia Católica y el sector empresarial. Fijamos la atención en este actor (el bipartidismo) por considerar, en principio, que la crisis que padece también expresa, en buena medida, la de los otros actores lo que no exime de tratarlos en su especificidad, en otro momento, para profundizar en el peso que puedan estar teniendo en la actual crisis política. Por otra parte, como queda esbozado en el planteamiento temático, no profundizaremos tanto en el diagnóstico mismo de la crisis y sus actores, sino más bien en lo que ella está suscitando; es decir, en el impacto que está teniendo para una nueva articulación de fuerzas sociales y políticas y de proyecto político alternativo.

A la postre, el intento de estas notas o apuntes puede resultar en una proyección; es decir, expresar más lo que deseáramos que suceda, como posible salida a la actual

crisis política, que lo que realmente puede estar sucediendo. Asumiremos ese riesgo con tal de ofrecer algunas opiniones sobre un tema que ha sido objeto de mucho debate.

LA CRISIS DEL BIPARTIDISMO: PUSC Y PLN

La crisis del bipartidismo costarricense es parte de todo un proceso de cambio sociocultural, en la cual se ha puesto bajo la lupa crítica a la institucionalidad que tradicionalmente asumió el derecho a la representatividad de colectivos importantes, incluso de alcance nacional o regional. Con tal propósito se apeló, como señalan algunos autores críticos de la modernidad, al imaginario de “nación” como fundamento ideológico para legitimar la visión de un proceso ininterrumpido hacia la sociedad del progreso y el bienestar. Efectivamente, asistimos a una etapa del desarrollo sociocultural de los pueblos en la cual saltan las diferencias de opiniones, de grupos de interés particulares, de identidades culturales, de género, etc., que están incidiendo con fuerza en la reconfiguración de todos los campos. Uno de los fenómenos más reveladores de esta tendencia se produce en el campo religioso, donde no sólo se ha dado una diversificación de las ofertas sino —ante todo— una pérdida de adhesiones fuertes a las instituciones tradicionales —es lo que se ha denominado el fenómeno de la “creencia sin pertenencia”—. Tendencia similar es la que se da en el ámbito de la institucionalidad partidista tradicional, particularmente en casos

como el nuestro, en el que no se ha dado un remozamiento de sus estructuras y propuestas ideológicas, acorde con las condiciones del nuevo contexto sociocultural y político.

El bipartidismo costarricense sólo ofrece algunos esfuerzos de remozamiento que no van más allá de un maquillaje para la venta —cada cuatro años— de su imagen con fines electorales. Es decir, se ha convertido en una especie de “máquina tragamonedas”, que recibe votos ofreciendo la ilusión de hacernos prósperos y desarrollados —especialmente insistiendo en erradicar la pobreza—, como recurso de manipulación electoral. Y es este, precisamente, uno de los aspectos que ha profundizado su crisis. Efectivamente, el discurso de la oferta salvadora, que pretende traer el cielo a la tierra, es visto cada vez más por una ciudadanía “avispada” como lo que es, es decir, como una burda manipulación.

Un indicador del avance en la conciencia crítica respecto del perfil electoralista de los partidos políticos lo constituye el creciente índice de abstencionismo que se ha venido dando en las últimas contiendas electorales, especialmente en la que eligió al candidato del PUSC, Miguel Ángel Rodríguez, frente a su contendiente del PLN José Miguel Corrales, en el año 1998, que alcanzó un 30,1%. Si bien es cierto que en la contienda pasada hubo visos de reencantamiento con lo político-electoral favorecidos por la figura campechana

y populista del *sui géneris* candidato del PUSC, el Dr. Abel Pacheco, y un partido emergente con un enérgico candidato, el Dr. Ottón Solís, la tendencia actual pareciera orientarse hacia la constitución de un "partido" mayoritario compuesto por quienes se abstienen de emitir el voto, desencantados con las ofertas de turno. No se trata necesariamente de un voto protesta que exprese la necesidad de articular una nueva alternativa a los partidos tradicionales, aunque podrían notarse señales en esa dirección, especialmente con el apoyo que se ha ofrecido a los partidos emergentes, todavía no tan sustantivo- sino más bien de una expresión de agotamiento y desinterés por lo político, ante el reiterado mensaje demagógico y la falta de coherencia y consistencia ideológica y programática de los oferentes. "Más de lo mismo" es la frase que se ha convertido en expresión de tal desencanto y frustración del electorado costarricense.

Otras de las expresiones más recientes de ese desencanto es la emergencia de nuevos partidos que se perfilan como ideológicos y programáticos; es decir, con una propuesta que los hace distinguibles de otros partidos o, en todo caso, del bipartidismo. Se trata de un fenómeno que empieza a cobrar fuerza, especialmente a partir de la constitución del Partido Acción Ciudadana (PAC) bajo la presidencia del Dr. Ottón Solís, ex-ministro y ex-diputado del PLN, y



del Movimiento Libertario (ML), dirigido por el Lic. Otto Guevara, ex-militante del PUSC. Ambos partidos, de tendencias ideológicas opuestas, lograron llevar al congreso un importante número de diputados en la última contienda electoral.

Estas nuevas ofertas políticas, aún y cuando tienden a consolidarse, no llegan a producir el tan deseado reencantamiento con la política. Los datos de las últimas encuestas tampoco dan un porcentaje significativo de adhesión a estas nuevas instancias partidarias, a pesar de que la coyuntura actual resultaría favorable para que los ciudadanos cambien de tienda partidista. A lo que asistimos hoy es a la intensificación del fenómeno del pluripartidismo, con el fraccionamiento en los partidos minoritarios, así como por la disidencia de dirigentes del PLN y el PUSC. Efectivamente todos los partidos minoritarios de reciente formación se han fraccionado y la disidencia de los partidos tradicionales es notable entre líderes de trayectoria, particularmente en las filas del PLN.

Una primera aproximación a la crisis política y sus repercusiones en el fenómeno del bipartidismo, en la actualidad, nos lleva a considerar al menos cuatro etapas de dicho fenómeno, que nos ayudan a su caracterización:

a) *La primera* podría definirse como de constitución del bipartidismo,

con propuestas ideológicas y programáticas más o menos diferenciadas y distinguibles. *b) Una segunda*, en donde dichas características se van desdibujando al punto de llegar a constituir en la práctica aunque formalmente aparezcan como dos ofertas partidarias una misma propuesta ideológico-partidaria. *c) La tercera* muestra su crisis de legitimidad que tiene como principal expresión el creciente pluripartidismo. *d) La cuarta* corresponde a la tendencia que va del pluripartidismo a una estrategia de alianzas, la cual expresa la búsqueda de convergencias para enfrentar al bipartidismo y abrir un nuevo horizonte en la vida política nacional.

Hacia la constitución del bipartidismo⁴: Calderonismo vs. Liberacionismo

Hasta la administración del Lic. Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), que marcó un antes y un después en la vida política nacional, especialmente por haberse enfrentado a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), puede decirse que se mantuvo un perfil que diferenciaba ideológica y programáticamente a las dos fuerzas políticas mayoritarias del país: las de tendencia socialdemócrata que crearon el Partido Liberación Nacional (PLN)

y las que buscaban recoger la herencia política del calderonismo, inspirados en una visión socialcristiana, y que llegaron a constituir el actual Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Más propiamente cabría hablar de dos perfiles ideológico-partidistas que asumieron nombres relacionados con hechos histórico-políticos relevantes e incluso con referencia a los líderes que los protagonizaron. Por una parte la gesta del 48 emprendida por el Movimiento de Liberación Nacional, bajo la dirección del caudillo Figueres Ferrer, lo que posteriormente se conocerá como el *liberacionismo*. Por otra, la gran reforma social de la década de los años 40 impulsada en el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que se denominará el *calderonismo*.

El liberacionismo se edificó ideológicamente recogiendo la visión socialdemócrata de pensadores como Rodrigo Facio Brenes y de su máximo representante político, José Figueres Ferrer. Ambos líderes coincidían en la necesidad de proyectar la sociedad costarricense sobre los principios de justicia social y desarrollo con equidad, para lo cual se requería de un aparato de Estado fuerte, que no sólo garantizara servicios básicos en salud, educación, telecomunicaciones, seguros, etc., sino que incluso

4. Aunque sociológicamente podemos hablar de un bipartidismo, cabe destacar que a estas alturas —particularmente en el caso del calderonismo— no estamos ante una instancia de partido propiamente dicha. Esta tendencia se comporta como una coalición de partidos que buscan enfrentar al liberacionismo. Es por ello que lo que se da es —más propiamente— una especie de bipolaridad ideológico-política que se comporta y busca constituirse en bipartidismo. Puede decirse que, a partir de 1978 con la creación del Partido Unidad —que llevó al poder al Lic. Rodrigo Carazo— esta tendencia asume el perfil propiamente de partido fuerte, superándose, de alguna manera, la modalidad de coalición de fuerzas políticas.

sé abocara al desarrollo de empresas estatales concebidas como promotoras de un modelo de desarrollo capitalista moderno y solidario.

Las administraciones del PLN, hasta la del Lic. Daniel Oduber Quirós (1974-1978), fueron una genuina expresión ideológica y programática de aquellos principios propios de una orientación socialdemócrata. La democratización de la educación y la salud, así como el apoyo y estímulo a la actividad agrícola aunque de alguna manera sufrió el impacto regresivo producido por el modelo de sustitución de importaciones y la búsqueda de un desarrollo industrial autónomo, mostraban la coherencia ideológica de su propuesta.

Puede decirse que su perfil ideológico-programático se manifestaba, en lo fundamental, por su interés en facilitar vías de ascenso social para los sectores medios y bajos de la población costarricense y, paralelamente, por hacer avanzar el país hacia un modelo de modernización capitalista de su estructura productiva, manteniendo un fuerte componente de política social que creara las condiciones necesarias para evitar la polarización social y política. Es decir, se proyectaban esfuerzos tendientes a evitar la conformación de dos Costa Ricas, utilizando al aparato de Estado como agente regulador de la economía de libre mercado y promotor de bienestar social para toda la población, con un acentuado estilo de promoción y asistencialismo social. El ideal de conformar una

sociedad asentada sobre una fuerte clase media, con dos polos menores hacia arriba y hacia abajo —a la manera de la figura del romboide— expresaba, en buena medida, el derrotero socialdemócrata y liberacionista. Por otra parte, se consideraba a los intelectuales como agentes fundamentales de este proyecto de sociedad. Es decir, una *intelligentzia* que, con fuerte vocación de servicio público, permitiera darle, a la sociedad en formación, un rostro moderno y socialmente solidario. De alguna manera, se percibió al político como un estadista e intelectual, un estudioso de los problemas de su realidad nacional; un agente de desarrollo y de bienestar social.

Por el lado del PUSC, inspirado en el ideario socialcristiano, cuya fuente privilegiada era la Doctrina Social de la Iglesia Católica, vamos a tener ideales similares al liberacionismo desde el punto de vista del proyecto de sociedad costarricense por construir, aunque con estrategias ideológicas y programáticas diferentes. Más que la concepción de un Estado fuerte y emprendedor, se planteaba el ideal de una sociedad civil organizada y participativa que se convirtiera en gestora de su propio proceso de desarrollo social. Se optaba por un modelo de Estado facilitador y estimulador de la gestión privada, considerada ésta como el eje fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico. Su fundamento ideológico se recoge en la reiterada frase: “no se puede hacer chocolate sin cacao”. Con ello se planteaba que el

principio básico de su propuesta residía en una sociedad eficiente y productiva, cuyo crecimiento redundaría, en buena medida, en beneficios sociales sustantivos. Se propendía a un modelo de sociedad arraigada sobre una élite ilustrada, capaz de preparar profesional y técnicamente a la ciudadanía al más alto nivel, para fortalecer una gestión empresarial moderna que garantizara eficiencia y productividad. Y el perfil del político obedecía, coincidiendo con esa estrategia, en cierta forma, a la de un estadista con capacidad diplomática para concertar intereses diversos; es decir, en buena medida un “técnico” de la gestión pública con sensibilidad para procurar el bien común, sin estrujar la iniciativa empresarial privada. Todo lo contrario: favoreciéndola y promoviéndola.

Como puede apreciarse tenemos dos propuestas ideológico-partidarias con intenciones y proyectos más o menos comunes, pero con diferencias sustantivas y claramente identificables. Por un lado, podría decirse que se postula el ideal del crecimiento para el desarrollo social y por el otro el del desarrollo social para el crecimiento. Uno enmarcado en la fortaleza del Estado como agente de bienestar y modernización productiva; el otro, en una sociedad de empresarios privados como agentes de modernización, con una visión y proyección de solidaridad social. Mientras

el liberacionismo insistía en gravar al capital y a la iniciativa privada, como mecanismo para garantizar una mejor redistribución de la riqueza, el calderonismo era más cauto en esta política fiscal y propendía a favorecer al capital y la iniciativa privada como mecanismo para alcanzar mayor crecimiento y, de esta manera, contar con recursos más “sanos” para financiar la institucionalidad social del Estado.

En resumen, se trata de dos propuestas ideológico-programáticas diferentes y claramente distinguibles, aunque no necesariamente contrapuestas en lo esencial. Ambas se disputan una clientela política que, en alguna medida, podía percibir las diferencias más allá del color de sus banderas.

Del dipartidismo al unipartidismo⁵: el PUSC

La década de 1980 marca el inicio de la ruptura del bipartidismo tradicional. Esto se debió a que después del *impasse* del gobierno del Lic. Rodrigo Carazo Odio, los gobiernos del PLN y del PUSC adoptaron la estrategia de desarrollo propiciada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que obligó a la mayoría de países de América Latina a firmar Programas de Ajuste Estructural (PAE), como condición para girar recursos financieros que vinieron a compensar las debilitadas economías, a raíz de la crisis

5. Utilizamos el término “unipartidismo” para referirnos no a una única instancia partidista propiamente dicha, sino para destacar el proceso que tiende a desdibujar las diferencias entre el PLN y el PUSC debido a las estrechas relaciones que se establecen entre las élites partidarias de dichos partidos.

de la deuda externa o, más propiamente, con el fin de que estos países asumieran los compromisos de la deuda.

Ambas tendencias, que se comportaban como una bipolaridad ideológico-política, mantenían rasgos reformistas-modernizantes comunes, que los hacían aparecer como protectores del capital transnacional y nacional vinculado a los grandes negocios; e inician un proceso de plena conciliación de intereses en el nuevo marco de una política económica neoliberal. No es casual entonces, que, a partir de 1986, se gobernara fundamentalmente desde el Banco Central, siendo uno de sus más conspicuos ideólogos para ambas instancias partidistas –ahora con mayor afinidad ideológica– el economista Eduardo Lizano Faith. Efectivamente, don Eduardo Lizano marcó el derrotero de la política económica costarricense prácticamente hasta nuestros días, con un decidido perfil neoliberal. Logró mantener, de alguna manera, la barca a flote aderezando el menú neoliberal con algunas concesiones al viejo modelo del Estado social de derecho.

Cabe destacar que el deseado desmantelamiento de aquel modelo de Estado, propiciado por las fuerzas más ortodoxas del neoliberalismo, representadas –por ejemplo– en el gobierno del Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier, por el Lic. Thelmo Vargas, encontraron la más asidua oposición por parte de la ciudadanía, especialmente de aquella perteneciente al sector de educación superior, lo que implicó la re-

nuncia del citado funcionario. Fue una coyuntura de confrontación, que mostraba la voluntad ciudadana por defender derechos fundamentales, como el financiamiento de la educación pública superior, a contrapelo de la receta neoliberal que buscaba ensanchar el espacio a la educación superior privada, la cual ya había venido experimentando un auge sin precedentes en el país. Sin embargo, lo cierto es que prevaleció una política compartida por ambos partidos, en sus respectivas administraciones, de reducción del aparato del Estado –con acciones concretas como la movilidad laboral, que tiró a la “calle” una buena cantidad de empleados públicos–, procurando el fortalecimiento de las empresas privadas, y debilitando significativamente todas aquellas instituciones y proyecciones estatales dirigidas a mejorar la condición social del trabajador asalariado, del agricultor y de la población costarricense en general.

El conflicto sociopolítico se continuó agudizando, poniendo en evidencia que la estrategia de alianzas del bipartidismo iba más allá de un asunto puramente coyuntural, como era la norma en el pasado. Ahora se trataba de un pacto permanente que los ponía a jugar en igualdad de condiciones, no ya como contendientes ideológicos, sino como propulsores de una misma estrategia política con bases ideológico-programáticas comunes y compartidas.

En este contexto, destacan dos hechos de gran relevancia sociopolítica. Por una parte, la lucha

emprendida por el Magisterio Nacional contra la nueva ley de pensiones impulsada en la administración Figueres Olsen, y que era parte de la agenda contemplada en el pacto Figueres-Calderón. Y, por otra, la lucha contra la ley de modernización del ICE –el llamado “Combo ICE”– en la administración del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, que contó con los votos favorables de la mayoría de diputados de la fracción del PLN, y la cual suscitó una protesta de alcance nacional. Ambos hechos vinieron a confirmar, una vez más, que el país estaba en manos de un cogobierno bajo una modalidad unipartidista: el PLUSC.

Estas dos luchas son profundamente simbólicas. Por el lado del PLUSC, se dibuja su decidida disposición a bajar el perfil de expectativas crecientes en materia de bienestar social para la población costarricense; incluso, bajo el pretexto de procurar sanear las finanzas del Estado se dejaba de honrar sus compromisos, como por ejemplo los contraídos con el sector magisterial. Si bien es cierto que los intentos de reforma del Estado habían venido abortando, de alguna manera se procuró canalizar dicha reforma siguiendo una estrategia escalonada, que apuntara a los mismos fines, a saber, aquellos que garantizaran una reducción cualitativa del Estado. En el fondo se trataba de una clase política interesada en usufructuar de los bienes o negocios del Estado; algo similar a lo que se decía, en el caso mejicano, respecto de la “**PRIVATIZACIÓN**”, haciendo referencia a los

intereses de los mismos dirigentes del partido en el poder –PRI–, de participar directa o indirectamente de los beneficios reportados con la venta de los negocios más rentables del Estado.

Por el lado de la ciudadanía, asistimos a una manifestación sólo comparable con lo que aconteció con las manifestaciones estudiantiles de la década de los años 70, contra los contratos de ALCOA. Para las clases dirigentes –representadas en el PLUSC– no dejó de resultar una sorpresa la movilización de Sur a Norte de campesinos, obreros, estudiantes y profesionales. Fue necesaria la mediación de la Defensoría de los Habitantes y la constitución de una comisión que se abocaría a reformular el proyecto aprobado por la mayoría parlamentaria, para que se evitara una paralización total del país y una polarización de consecuencias impredecibles. Sin duda la lucha contra el “Combo del ICE” marcó un antes y un después en el despertar ciudadano de los costarricenses. Y, particularmente, puso en evidencia, una vez más, que el bipartidismo había hecho causa común, sentando el irrefutable precedente de haberse comportado como una única fuerza ideológico-política, con un derrotero privatizante que dejaba atrás las viejas conquistas del Estado social de derecho y se apresuraba a vender la institucionalidad pública de servicio social al mejor postor. Estábamos a las puertas de una “argentinización”, con las nefastas consecuencias sociales que implicó –en su momento– para las

mayorías del hermano país. El costarricense pudo discernir que esta lucha era decisiva, y que ceder, a los consorcios transnacionales, una de las instituciones con mayor vocación social en el país, era como retrotraer los contratos bananeros del siglo XIX, que nos legaron el perfil de "banana republic". Como si resurgiesen los espíritus ancestrales más combativos, la ciudadanía levantó la bandera de la patria en señal de dignidad, forzando a las fuerzas entreguistas a claudicar en su intento de vender la primogenitura por un plato de lentejas.

Estas manifestaciones de descontento e indignación popular daban pie para que, en alguna medida, en el mismo bloque histórico constituido por la trilogía ya mencionada, empezaran a aflorar las disonancias y, a su vez, se dieran las condiciones para que nuevas fuerzas políticas hicieran acto de presencia y decidieran tomar distancia del bipartidismo, que en esta coyuntura particular resultaba más evidente que se estaba transformando en PLUSC.

Efectivamente, este fenómeno tuvo su expresión en uno de los actores del bloque, en este caso, la Iglesia Católica. Así, por ejemplo, la diócesis de San Isidro de El General, asumió un papel protagónico, con una especial movilización del laicado que cumplió un papel de no poca relevancia sociopolítica. Resultando también, como hecho sumamente significativo, la designación de líderes laicos para representar

oficialmente a la Iglesia Católica en la comisión negociadora.

Después de estos hechos asistimos a la conformación de dos nuevas fuerzas políticas emergentes: El PAC y el ML, que marcarían el camino de una nueva etapa en la crisis del bipartidismo, la que apunta hacia el pluripartidismo como una expresión de esa incansable búsqueda por ofrecer alternativas que vengan a satisfacer las aspiraciones de cambio, de una ciudadanía desencantada con el PLUSC. Efectivamente, es cada vez más notable y adecuadamente percibido por ciertos líderes de las mismas filas del PLUSC el agotamiento y la incapacidad de dichas fuerzas para ofrecer una alternativa partidaria remozada, que responda a los desafíos que plantea la nueva ciudadanía costarricense.

Del unipartidismo al pluripartidismo

Podría decirse, guardando las distancias y haciendo las diferencias del caso, que la pasada administración del Dr. Abel Pacheco representa un nuevo *impasse* en la política costarricense, más cercano a lo que representó la candidatura del Dr. Óscar Arias Sánchez. El Dr. Pacheco al igual que el Dr. Arias han sido elegidos —en sus respectivos momentos— a la presidencia sin la venia y apoyo de los jefes de sus respectivos partidos. Ahora bien, mientras que en el caso de Arias la falta de apoyo del viejo caudillo Figueres y del expresidente Daniel Oduber, no significaba

—necesariamente— el debilitamiento del PLN, en el caso de Pacheco sí podemos decir que el distanciamiento de los máximos líderes del PUSC, tanto de Rafael Ángel Calderón como de Miguel Ángel Rodríguez, coincidieron con un debilitamiento y un desgaste político de su partido. Efectivamente, tal situación obedecía, por un lado, a los desaciertos de la administración Rodríguez y, por otro, al bajo perfil del liderazgo de Calderón Fournier, venido a menos desde que el Dr. Abel Pacheco, desde la presidencia del PUSC, logró capitalizar favorablemente la visita que realizaran ambos líderes a un empresario mejicano, a quien se asociaba con el negocio del narcotráfico en su país. Esa ocasión fue aprovechada por Pacheco para afirmar su imagen de persona honesta y decidida a “jalar los mecates” a los más altos jerarcas de su partido. Estamos ante un nuevo rostro de la política costarricense, de corte populista y patriarcal, que señala también el agotamiento de las fuerzas políticas del PLUSC.

Podría decirse, de alguna manera, que la administración Pacheco representa, por un lado, una búsqueda por recomponer el bipartidismo sobre nuevas bases y, por otra, un intento por crear una nueva propuesta partidaria con visión nacional, desde las filas del PUSC. Realmente si algo caló hondo y contribuyó a aglutinar capital electoral para el Dr. Pacheco fue su

mensaje de corte nacionalista, más que propiamente partidista socialcristiano. Además, como ya se ha mencionado, fue precisamente el distanciamiento de los jefes del partido lo que lo catapultó como un líder en quien confiar; es decir, que prometía, al menos, refrescar el sofocante ambiente político nacional.

Si aceptamos el diagnóstico anterior, en alguna forma la administración Pacheco ha resultado paradójica y, como tal, en un indicador del derrotero que va del unipartidismo (PLUSC) al pluripartidismo. Por un lado, ensancha sus tiendas para incluir liderazgo político perteneciente al PLN, algo que ya había venido dándose también en administraciones del PLN, pero que ahora expresa —más bien— el debilitamiento de las mismas fuerzas que se coaligan. Se trata de alianzas entre débiles que buscan fortalecerse; sintomático, por lo tanto, del debilitamiento del PLUSC. Por otro lado, podría decirse que la propuesta de corte nacionalista, aunada al perfil populista del candidato, mostraban, a su vez, que se trataba más que de un partido tradicional que aspiraba al poder, de una figura —como algunos dicen, más grande que el partido— que con sencillez y espíritu acogedor generaba la expectativa del carisma político apetecido por el costarricense, más cercano al ser humano que entiendo de enfermedades y dolores que al político de carrera, estadista intelectual de clase media⁶.

6. Esto podría estar indicando que el ciudadano costarricense mantiene una afinidad particular con un liderazgo político que, además de tener porte de estadista y ser intelectualmente capaz, tenga

El pluripartidismo no es un hecho novedoso en la historia política reciente; lo que sí puede serlo es la fuerza que está cobrando para perfilarse como una alternativa al unipartidismo del PLUSC en decadencia. Sin que represente un reencantamiento con lo político-electoral, como ya hemos señalado, el PAC y la figura del Dr. Solís marcan un punto de partida en esa dirección. Asimismo, el ML logra ensanchar sus tiendas, capitalizando no sólo la crisis del unipartidismo, sino colocándose decididamente a favor de los vientos neoliberales. Por otra parte, ya desde la lucha del combo se podía percibir un repunte de la izquierda, especialmente con el protagonismo que tuvo, en sus filas, el ex-diputado José Merino.

El pluripartidismo es básicamente el resultado del debilitamiento del unipartidismo del PLUSC. Este pluripartidismo pasa por su mejor momento, aunque no necesariamente por las fortalezas y las cualidades de sus propuestas alternativas al bipartidismo. Una de las expresiones de este fenómeno es el relativo desgaste que se notó en la imagen del candidato estrella del PLN, el Dr. Óscar Arias Sánchez. La cercanía que ha tenido con la administración Pacheco, ensayando —incluso— un cogobierno, aunado a un comportamiento de corte “caudillista”, aparecen como factores que inciden en ese desgaste político-electoral. Pero es, ante todo, el

papel que viene jugando una ciudadanía cada vez más beligerante en la defensa de la institucionalidad pública del país, lo que está pesando para salir al paso de un candidato que no ofrece mayor confianza en la preservación de los bienes públicos, habiendo dado muestras de ello en el pasado, como lo fueron —entre otras cosas— las concesiones otorgadas en telefonía celular a la empresa MILLICOM, durante su administración. Su participación en el mundo de los grandes negocios financieros y del azúcar, entre otros, también está contribuyendo a su debilitamiento político-electoral, toda vez que presenta la imagen de un candidato de dos caras. Por una parte, defendiendo los intereses de la patria y procurando catapultarla hacia el desarrollo y, por otra, procurando favorecer sus negocios mediante contratos con el Estado, como ha sido el caso del etanol, y mostrándose como un defensor a ultranza de la apertura comercial.

El hecho que mejor ilustra la actual crisis del unipartidismo es el proceso judicial que se sigue a los ex-presidentes Calderón y Rodríguez. Como ya hemos indicado, se constituye en un hecho simbólico que expresa las dimensiones profundas y estructurales de la actual crisis política. Los escándalos tipificados como peculado -o sea, la obtención de beneficios privados utilizando recursos públicos- han puesto en la picota a los principales jefes del

la habilidad y sabiduría para expresar los valores de la sencillez, la sensibilidad social y el calor humano, que -al parecer- han sido parte del *ethos* cultural del costarricense, ahora venido a menos.

PUSC y, siguiendo el efecto de cascada, arrastra a líderes del PLN. Se muestra así, una vez más, que el país ha venido siendo cogobernado por las dos fuerzas políticas mayoritarias, independientemente de cuál de ellas haya accedido al poder. Es un poder bicéfalo que echó sus raíces en la “década perdida” de los años 80 y se ha proyectado hasta nuestros días.

Después de estos hechos, que profundizaron la crisis del bipartidismo, asistimos a la consolidación de la estructura pluripartidaria. Tres hechos específicos, en este sentido, resultan relevantes: la disidencia de líderes del PLN de amplia trayectoria, incluyendo a un hijo del caudillo Figueres Ferrer, don Mariano Figueres y a un ex-secretario general del PLN, don Luis Guillermo Solís; los intentos por constituir directorios legislativos pluripartidistas; y, más recientemente, la articulación política de las mujeres diputadas con intenciones de conformar una papeleta pluripartidaria, con rostro de mujer.

Si bien es cierto que la disidencia significativa de líderes importantes se ha dado tanto en el PUSC como en el PLN, en este último ha sido en mayor número y, ante todo, mostrando no solo malestar e inconformidad con los recientes hechos de corrupción en que han estado implicados miembros de su partido, sino con la orientación ideológica y la conducción política que ha venido asumiendo el Dr. Óscar Arias, candidato único después de la renuncia de su contendiente Antonio

Álvarez Desanti. Es muy significativo que quienes han renunciado al PLN, lo han justificado aduciendo que se han traicionado los principios ideológicos y doctrinarios social demócratas que fueron el cimiento de dicho partido. Tal fue el planteamiento contenido en la carta de renuncia firmada por don Mariano Figueres y don Luis Guillermo Solís. En esa misma dirección se pronunciaron los miembros del “grupo de los diez”, constituido por líderes de amplia trayectoria, tales como la ex-primera dama Josette Altman, el ex-presidente de la CCSS Guido Miranda y el ex-ministro de Planificación Juan Manuel Villasuso; acaso en un último intento por retomar la bandera socialdemócrata. Aduciendo criterios similares renunciaron el ex-candidato Antonio Álvarez Desanti y el diputado José Miguel Corrales. Ante esta situación el candidato Óscar Arias se presenta como el líder que se propone refundar el PLN, contando con el apoyo –también– de líderes de trayectoria liberacionista. Ambos sectores consideran que ha llegado el tiempo del cambio, aunque para impulsar ese cambio se planteen estrategias y objetivos diferentes.

El candidato Arias y su grupo han decidido mantenerse bajo las diezmadras tiendas del partido, procurando hacer sintonizar los ideales socialdemócratas con las nuevas realidades de una sociedad globalizada que, en su criterio, marca un nuevo derrotero de apertura comercial y modernización de la institucionalidad pública, incluida la

“privatización” de algunas áreas estratégicas, hoy bajo el monopolio del Estado. Se trata de una especie de *aggiornamiento* liberacionista.

Mientras que por el lado de los disidentes tenemos a quienes se disponen a llevar consigo los ideales socialdemócratas —defendiendo al Estado social de derecho y a sus instituciones— a otras tiendas partidarias. Tal es el caso de la decisión del “grupo de los diez” de incorporarse a las filas del PAC, para participar en la contienda electoral, aunque insistiendo que no los mueven fines puramente electorales. Una tendencia similar parece estar dando en el diputado Corrales quien fue invitado a postularse como el candidato del Partido Unión Patriótica, constituido e impulsado por la fracción que se separó del PAC, la cual se encuentra bajo el liderazgo del diputado don Humberto Arce. Como puede apreciarse, la disidencia liberacionista ha venido a oxigenar al pluripartidismo.

Dos elementos están gravitando con fuerza en la coyuntura política actual: el TLC con Estados Unidos (TLCAUSA) y la candidatura del ex-presidente Arias. El TLCAUSA se está constituyendo en tema electoral de fondo y, por lo polémico que es, puede convertirse en el eje donde mejor se expresen las posiciones ideológicas encontradas de las “nuevas” fuerzas político-electorales. Por su parte, la candidatura de

don Óscar sin duda fue también objeto de polémica, por tres razones fundamentales: su posición favorable a la firma del TLC con USA, su estilo autárquico tradicional de hacer política y el cuestionamiento a la legitimidad constitucional de la reelección presidencial.

Los otros hechos relevantes que marcan el nuevo derrotero hacia el fortalecimiento del pluripartidismo tienen como escenario la Asamblea Legislativa. Se trata, por una parte, de los persistentes intentos por conformar directorios pluripartidistas⁷, que todavía no alcanzan a superar las tendencias hegemónicas del partido en el poder, pero sí han tenido logros en relativizarlo. Por otra parte, la iniciativa pluripartidista de las mujeres diputadas de conformar una papeleta de consenso para tener acceso a puestos importantes en el directorio, representa, además de un hecho inédito, la fuerza de un sector cada vez más protagónico en la vida política nacional y con capacidad para articular propuestas pluripartidistas.

Podríamos ensayar la hipótesis de que las fortalezas del pluripartidismo no obedecen todavía a los méritos propios de los partidos emergentes y sus líderes. Sus divisiones internas no son buena señal y el liderazgo no logra entusiasmar y generar confianza. Más bien son el resultado, por una parte, de una ciudadanía que ha venido

7. En mayo de 1998 se dio un intento en esa dirección, que abortó por la venta del voto de tres diputados minoritarios al partido gobernante, perdiéndose una valiosa oportunidad de crear un antecedente que marcara un nuevo derrotero en el estilo de hacer política por parte del primer poder de la República.



aspirando de manera creciente a que se conforme una alternativa partidista con nuevos rostros y, ante todo, con propuestas más atrevidas para encarar el desafío de construir un nuevo proyecto-país; por otra, se debe a las debilidades mismas del bipartidismo, que si bien es cierto en algunos momentos da muestras de contar –todavía– con el favor de los electores, en verdad es que pesa más la sanción moral de que está siendo objeto por parte de una ciudadanía que cada vez parece ganar más confianza en sí misma, que en quienes pretenden representarla.

Así las cosas, estamos ante una ciudadanía que se debate entre la disposición generosa para llamar al bipartidismo a repensarse y rehacerse, y la decisión de aplicar un castigo o lección, que podría conducir a fortalecer el pluripartidismo, incluso favoreciendo la elección de un candidato de consenso entre fuerzas políticas emergentes ideológicamente cercanas, que vayan más allá de las instancias partidistas. Se abre –entonces– una ventana de oportunidades político-electorales para una coalición de fuerzas progresistas que retomen la bandera de la dignidad, la soberanía

y la justicia social.

Del pluripartidismo a la nueva estrategia de alianzas

El pluripartidismo, junto con otras fuerzas sociales que han asumido el perfil de un amplio movimiento patriótico, en defensa de las conquistas de un Estado social de derecho, vienen dando muestras crecientes de interés y voluntad por llegar a una alianza político-partidista. Cabe destacar, por una parte, que están sumando fuerzas alrededor de una posible alianza, el liderazgo mostrado por los diputados representantes de dos fuerzas importantes: el PAC y Unión Patriótica (UP). Con diferencias que parecieran obedecer a estilos de liderazgo y conducción política más que a la propuesta ideológica y programática, ambas instancias podrían estar dispuestas a contribuir con la conformación de una coalición.

A la anterior se podrían sumar las fuerzas de la izquierda tradicional y otras conformadas por pequeños partidos interesados en dar su aporte para contribuir con la superación –de una vez por todas– del bipartidismo. Por otra parte, tenemos a algunos movimientos sociales que vienen sumando energías para esta posible alianza. Nos referimos al Movimiento por la Defensa de la Institucionalidad, dirigido por el ex-presidente Rodrigo Carazo, que surgió al calor de la lucha contra la privatización del ICE y que ha prolongado sus acciones aportando críticamente al debate sobre el TLCAUSA; a la Comisión

de Enlace, bajo la presidencia del sociólogo José Luis Vega Carballo, que aglutina a un amplio espectro de organizaciones de base; y al Movimiento Cívico Nacional, que ha emprendido la lucha contra la empresa RTV y también contra el TL-CAUSA, entre otros.

La nueva estrategia de alianzas puede ser vista obedeciendo a cuatro factores o proyecciones sociopolíticas: **1.** la necesidad de presentar un frente amplio fuerte por parte de los partidos minoritarios, habiendo reconocido estos su fracaso o debilidades electorales en la historia político-electoral reciente del país; **2.** la urgencia de ofrecer una alternativa partidista que enfrente al bipartidismo, exigida ya hace rato por una ciudadanía cansada de "más de lo mismo"; **3.** la necesidad de articular un nuevo proyecto político que sirva de base para el cambio en el sistema democrático, aunado a la necesidad de darle forma a un nuevo proyecto de país y **4.** encontrar una forma de contener a un candidato asentado sobre algunos elementos de legitimidad tradicional importantes, y percibido, por sus opositores, como el nuevo rostro político de los sectores neoligárquicos transnacionalizados; es decir, con tendencias neoliberales.

La coyuntura actual puede resultar favorable para una coalición de fuerzas políticas y sociales decididas a asumir el reto de proyectar la nueva sociedad costarricense. Eso parece estar en la agenda de quienes perciben que las dimensiones que asumen los retos sociopolíticos

y culturales actuales rebasan —en mucho— las proyecciones cortoplacistas de una próxima campaña electoral. Ello apuntaría a relativizar una estrategia de alianzas de carácter puramente electoral, para constituir, más bien, una gran plataforma de pensamiento y acciones dirigidas a repensar los cimientos de esa nueva sociedad. Sin embargo, para tal objetivo de largo plazo, la coyuntura actual puede resultar favorable siempre y cuando el espíritu que anime a los diversos partidos y sectores sea, precisamente, esa visión de futuro y, ante todo, el sentimiento de patriotismo en la defensa de los logros sociales del país y la búsqueda de elevar el nivel de vida digna para quienes el actual estado de cosas se ha vuelto insoportable.

Si bien es cierto, como han venido señalando los analistas y expertos, una estrategia de alianzas pluripartidistas y plurisectoriales requiere la superación de los personalismos tan arraigados en nuestra cultura costarricense, y una agenda común compartida que asuma los principales desafíos que presenta el país en la actual coyuntura, es fundamental —también— contar con una mayor participación de la ciudadanía. Esta alianza ha de ser, entonces, expresión fiel de la nueva ciudadanía que se está configurando y a la que hay que fortalecer. Se trata del protagonismo exigido por sectores y ciudadanos hasta ahora concebidos como de segunda y de tercera clase, subestimados por una tecnocracia e intelectualidad elitistas —y arribistas— que

no ha sabido sopesar el valor y la fuerza creadora de la ciudadanía en general.

Sin una nueva ciudadanía política, que es también decir un nuevo sujeto político, las transformaciones que se requieren tardarán más tiempo del que aquellos sectores podrán soportar. Y, entonces, estaremos a las puertas de un conflicto de proporciones insospechadas. Es

por ello, que una coalición de partidos y sectores con visión de futuro y espíritu patriótico puede constituirse en el eslabón necesario, no sólo para superar el bipartidismo, sino para servir a ese gran objetivo de construcción de esa nueva ciudadanía política, sin la cual cualquier proyecto de nueva sociedad o país, por más bien concebido que sea, se convertirá en letra muerta.

BIBLIOGRAFÍA

- Cátedra "Víctor Sanabria" (1995). *Lo urgente y lo importante. De Calderón Fournier a Figueres Olsen. Una lectura ética de la economía y la sociedad costarricense*. Heredia, C.R., EFUNA.
- Cedeño Rogelio (1996). La huelga magisterial de junio-agosto de 1995: los trabajadores en lucha contra la exclusión y el hambre. *Revista ABRA* nos. 21-22. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional. Heredia, EUNA.
- Chaves, Jorge A. (1999). *De la utopía a la política económica. Para una ética de las políticas económicas*. Salamanca, Editorial San Esteban.
- Delgado, Jaime (1980). *El Partido Liberación Nacional. Análisis de su discurso político-ideológico*. Heredia, EUNA.
- Facio, Rodrigo (1972). *Estudio sobre economía costarricense*. San José, Editorial Costa Rica.
- Figueres F. José (1980). *Cartas a un ciudadano*. San José, EUNED.
- Gallardo, Helio (1986). *Elementos de política en América Latina*. San José, DEI.
- González, D. Jaime (1981). *Democracia Cristiana y lucha de clases*. San José, Editorial Porvenir.
- Lechner, Norbert (1996). *Las transformaciones de la política*. Cuaderno de Ciencias Sociales 87. San José, FLACSO-programa Costa Rica.
- Molina J., Carlos (2003). *Realización y crisis de la democracia representativa*. Heredia, EUNA.
- Mora R., Arnoldo (1993). *Historia del pensamiento costarricense*. San José, EUNED.
- Portelli, Hugues (1985). *Gramsci y el bloque histórico*. México, Editorial Siglo XXI.
- Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2001). *Informe de la auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia en Costa Rica*. San José, Proyecto Estado de la Nación.
- Reuben S., Sergio (1988). *Ajuste Estructural en Costa Rica*. San José, Editorial Porvenir.
- Robles R., Amado (2001). *Repensar la religión: de la creencia al conocimiento*. Heredia, EUNA.
- Rojas B. Manuel (1996) *procesos electorales recientes y representatividad de los partidos: el caso centroamericano*. Cuaderno de Ciencias Sociales 87. FLACSO-Programa Costa Rica.
- Rojas B., Manuel y Sojo, Carlos (1995). *El malestar con la política*. San José, FLACSO-Programa Costa Rica.
- Rovira M., Jorge (1987). *Costa Rica en los años 80*. San José, Editorial Porvenir.
- Schmitter, Philippe (1995). *Consolidación de la democracia y representación de grupos sociales*. Cuaderno de Ciencias Sociales 76. San José, FLACSO-Programa Costa Rica.
- Ruiz Z., Ángel (1991). *La Tercera República*. San José, Instituto Centroamericano Cultura y Desarrollo.
- Sobrado, Miguel y Rojas J., José (2004). *América Latina: crisis del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas*. México, Cámara de Diputados del Distrito Federal de México.
- Sojo, Carlos (1995). *Al arbitrio del mercado*. San José, FLACSO.
- Vargas S., Luis Paulino. *La estrategia de liberalización económica (período 1980-2000)*. San José, Editorial de la UCR.
- Vega C., José Luis (1982). *Poder político y democracia en Costa Rica*. San José, Editorial Porvenir.
- Vega S., Álvaro (1997). El conflicto sociopolítico en 1996: resumen analítico de coyuntura. *Revista Economía y Sociedad* V. 1. No. 4 mayo-agosto de 1997. Escuela de Economía, Universidad Nacional. Heredia, EFUNA.
- Weber, Max (1982). *Ensayos de sociología contemporánea*. Barcelona, Ediciones Martínez Roca
- Wagner, Peter (1997). *Sociología de la modernidad*. Barcelona, Editorial Herder.